



Solicitamos enviado especial de Naciones Unidas ante crisis sanitaria

La Coalición Nacional se dirigió al Secretario General de Naciones Unidas, Señor António Guterres, reiterando su preocupación por el peligroso escalamiento de la crisis sanitaria a causa del COVID-19 que se desarrolla en Nicaragua por la desidia del régimen, la que sumada a la crisis humanitaria, de origen político, en que vivimos a partir de la violenta represión gubernamental debido al levantamiento popular de 2018, acentúan la grave violación de nuestros derechos humanos, es de destacarse que actualmente se mantienen más de 85 presos políticos secuestrados por el régimen, todo lo cual requiere de la urgente atención de la comunidad internacional.

La desatención del régimen de Daniel Ortega respecto a las orientaciones de la OMS/OPS ante la pandemia del COVID19 ha agravado la crisis sanitaria mucho más allá de lo que hubiéramos tenido que sufrir, si se hubieran tomado medidas de prevención más estrictas, a como lo hicieron algunos países de la región. La omisión criminal del régimen ha contribuido a la expansión del contagio hasta llevarlo a una situación de riesgo y muerte masiva que, tal como lo expresara el Papa Francisco, podría catalogarse como la promoción de un “genocidio virósico”. Esta situación ya representa una amenaza transfronteriza para todo Centroamérica, en términos de migración, comercio, manejo responsable de la pandemia y seguridad democrática, hasta constituir una amenaza para la paz de la región.

En el marco del principio de la Responsabilidad de Proteger (R2P), que implica proteger a las poblaciones de crímenes atroces y violaciones de sus derechos humanos, basado en el respeto a las normas y principios del derecho internacional, la Coalición Nacional solicita que Naciones Unidas tome con urgencia medidas más activas frente al caso de Nicaragua, como la designación de un Enviado Especial del Secretario General que contribuya iniciativas, ya en marcha por parte de la comunidad internacional, para una efectiva solución a las crisis de derechos humanos y sanitaria que se prolongan en Nicaragua y también amenazan a la población del resto de Centroamérica.

Managua, 8 de junio del 2020